



Estado Plurinacional de Bolivia
Órgano Judicial

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM, PRIMERA

Sentencia N° 115

Sucre, 5 de diciembre de 2016

Expediente : 038/2016-CA
Tipo de Proceso : Contencioso Administrativo
Demandante : Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Tarija
Demandado : Autoridad General de Impugnación Tributaria
Resolución Impugnada : RJ- AGIT-RJ 1898/2015 de 9 de noviembre
Magistrado Relator : Dr. Antonio Guido Campero Segovia

VISTOS: La demanda contencioso administrativa de fs. 28 a 38, en la que Apolinar Choque Arevillca en su calidad de Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales Tarija (SIN), impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1898/2015 de 9 de noviembre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la respuesta de fs. 114 a 119 (fs. 99 a 109 vía fax); la réplica de fs. 122 a 125 vta.; la dúplica de fs. 128 a 130; los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO I:

I.1. De la Demanda Contencioso Administrativa

I.1.1. Antecedentes de hecho de la demanda

La entidad demandante señala que, emergentes de procesos de determinación de una deuda tributaria sobre Base Presunta más sanción por omisión de pago, en fecha 18 de abril de 2008 se notificó por cédula al contribuyente Gonzales Romana Ambrocio con las Resoluciones Determinativas con número de orden 32025719, 32025718, 32025715, 32025714, 32025713, 32025712, 32025711, 32025710, 32025709, 32025708, todas de 17 de marzo de 2008, y posteriormente el 28 de abril de 2009, se notificó al contribuyente con los proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0505-09; 24-0506-09; 24-0507-09; 24-0508-09; 24-0509-09; 24-0510-09; 24-0511-09; 24-0512-09; 24-0513-09; 24-0514-09 por las citadas Resoluciones Determinativas, aplicándose en consecuencia el 14 de diciembre de 2010 medidas coactivas como la solicitud de retención de fondos a la ASFI, reiterándose la medida en fecha 22 de junio de 2011.

Por otro lado, emergentes de procesos de determinación de una deuda tributaria sobre Base Presunta más sanción por omisión de pago, en fecha 20 de junio de 2007 se notificó por cédula al contribuyente Gonzales Romana Ambrocio con las Resoluciones Determinativas con números de orden N° 30507877, 30507878, 30507879, 30507880, 30507881, 30507882, 30507883, 30507884, 30507885, 30507886, 30507887, 30507888 y 30507889 todas de 21 de mayo de 2007, y posteriormente el 28 de abril de 2009 se notificó al contribuyente con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0492-09; 24-0493-09; 24-0494-09; 24-0495-09; 24-0496-09; 24-0497-09; 24-0498-09; 24-0499-09; 24-0500-09; 24-0501-09; 24-0502-09; 24-0503-09 y 24-0504-09 por la citadas Resoluciones Determinativas, aplicándose en consecuencia el 14 de diciembre de 2010 las medidas coactivas respectivas como la solicitud de retención de fondos a la ASFI, reiterándose la misma el 22 de junio de 2011.

Manifestó también que, emergentes de procesos de determinación de una deuda tributaria sobre Base Presunta más sanción por omisión de pago, el 18 de abril de 2008 se notificó por cédula al Contribuyente Gonzales Romana Ambrocio con las

Resoluciones Determinativas con números de orden 32025717, 32025716 de 17 de marzo de 2008 y posteriormente el 20 de mayo de 2011, se notificó al contribuyente con los proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-1210-10 y 24-1211-10 por las citadas Resoluciones Determinativas, aplicándose posteriormente las medidas coactivas señaladas por ley.

Manifestó que, emergentes del proceso de determinación de una deuda tributaria sobre Base Presunta más sanción por omisión de pago, el 11 de diciembre de 2006, se notificó por cédula al contribuyente Gonzales Romana Ambrocio con la Resolución Determinativa N° 14/2006 de 10 de octubre, y posteriormente el 12 de febrero de 2007 se notificó al contribuyente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 005/2007; por la citada RD aplicándose el 14 de diciembre de 2010 las medidas coactivas respectivas como la solicitud de retención de fondos a la ASFI, reiteración a la misma en fecha 22 de junio de 2011, solicitud de 20 de febrero a la Contraloría General del Estado de registro de los datos del contribuyente y su adeudo tributario y últimamente en fecha 21 de mayo de 2013 se realizó una nueva solicitud de retención de fondos a la ASFI cobrándose retenciones de fondos con cheques de Gerencia en fechas 14 y 17 de junio de 2013 por Bs. 96 y 383, respectivamente.

Indicó que, a consecuencia de los proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria citados, mediante Testimonio N° 89/2014 y 94/2014 en primera instancia se procedió a hipotecar en Derechos Reales dos inmuebles de propiedad del contribuyente, con matrículas N° 6011270000182 y 6022010001545 por un total de UFV's 753.221, equivalentes a Bs. 1.487.701 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN 00/100 BOLIVIANOS), y en cumplimiento al mandamiento de embargo N° 0065/2014 de 29 de agosto de 2014, mediante acta de embargo N° 0065/2014 se embargó y registró en Derechos Reales el inmueble con matrícula N° 6011270000182 de propiedad del contribuyente.

Que, en fecha 29 de octubre de 2014, mediante nota el contribuyente con NIT 1317551017, citando Sentencias Constitucionales (SSCC), normativa tributaria como los arts. 59, 60, 61, 62, 68.2, 109.II.1) de la Ley N° 2492, 5 del Decreto Supremo (DS) N° 27310, 17 de la Ley N° 2341 y doctrina tributaria, solicitó la prescripción de la deuda tributaria contenida en los proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria citados, en el entendimiento que la AT tenía cuatro años para ejercer su facultad de ejecución tributaria de acuerdo al art. 59.4 del Código Tributario, y considerando que las notificaciones de las Resoluciones Determinativas fueron en la gestión 2007 y 2008, tal cual se acredita por las diligencias de notificación por cédula que cursan en antecedentes, hubiera operado la prescripción de la facultad de la AT para el cobro, pese a las medidas coactivas a las que se habría avocado no consiguió el logro de la supuesta deuda determinada al no producirse ninguna causal de interrupción o suspensión.

Señaló que, solicitó la anulación tanto del mandamiento de embargo como del acta de embargo N° 0065/2014 por carecer de los requisitos formales establecidos en los arts. 500 y 501 del Código de Procedimiento Civil aplicables por mandato del art. 5 de la Ley N° 2492, y que de acuerdo al art. 35.c) de la Ley N° 2341 son nulos de pleno derecho, indicando vicios de nulidad de los actos administrativos emitidos por la AT referidos a: 1. Bajo su desconocimiento se dio inicio a una verificación con alcance del IVA, IT e IUE, correspondiente a la no prestación de Declaraciones Juradas (DDJJ) de los periodos fiscales de la gestión 2004 señalando el art. 68 del Código Tributario; 2. Se le impusieron tributos y sanciones que no solamente están fuera del alcance de la verificación, sino también prescritos violando el art. 70.5 del Código Tributario; 3. Falta



Estado Plurinacional de Bolivia
Órgano Judicial

de motivación, fundamentos legales, contables de las Vistas de Cargo que dieron origen a las Resoluciones Determinativas por las cuales solicita prescripción; 4. Falta de motivación de la Vista de Cargo y de las Resoluciones Determinativas, al efecto cita los arts. 96 de la Ley N° 2492, 35 de la Ley N° 2341 y 31 del DS N° 27113 Reglamento a la Ley N° 2341 y Sentencias Constitucionales sin realizar una solicitud concreta de este punto.

Señaló que, en atención a dicha solicitud, la Administración Tributaria (AT) el 6 de mayo de 2015 emitió el Auto N° 25-0136-15, que fue notificado personalmente al contribuyente y que resolvió: 1. Declarar la improcedencia de la solicitud de nulidad del Mandamiento de Embargo N° 0065/2014 de 29 de agosto emitidos en contra del contribuyente; 2. Declarar la improcedencia de la solicitud de nulidad de actuados de la AT e las Vistas de Cargo N° 6129891994, 6129891902, 6129892706, 6129892828, 6129892078, 6129892158, 6129892250, 6129892340, 6129892426, 6129891828, 6129890374, 6129890742, 6129890820, 6129890902, 6129890980, 6129891062, 6129891152, 6129891246, 6129891334, 6129891422, 6129891514, 6129891616, 6129891746, 6129892516, 612989610, 610-VE-0024-005-06, Resoluciones Determinativas N° 32025719, 32025718, 32025715, 32025714, 32025713, 32025712, 32025711, 32025710, 32025709, 32025708, todas de 17 de marzo de 2008, 30507877, 30507878, 30507879, 30507880, 30507881, 30507882, 30507883, 30507884, 30507885, 30507886, 30507887, 30507888 y 30507889 todas de 21 de mayo de 2007 y 32025717 y 32025716 de 17 de marzo de 2008; 3. Declarar la improcedencia de la prescripción de la facultad de la AT para ejecutar los Títulos de Ejecución Tributaria firmes consistentes en las Resoluciones Determinativas señaladas en el punto anterior, disponiendo que se prosiga los trámites de ejecución tributaria hasta el cobro de los adeudos tributarios, en virtud a que la acción para que la AT ejerza sus facultades de ejecución tributaria prescriben en el término general de 4 años a contar desde el día siguiente a producirse la notificación con los títulos de ejecución tributaria que se pretenden ejecutar, de acuerdo a lo establecido en los arts. 59.I.4 y 60.II de la Ley N° 2492, que previo a las modificaciones introducidas por la Ley 291 y 317, disponía: "...En el supuesto 4 del párrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria". Esta notificación se dio en el presente proceso, en consecuencia dicho plazo concluía en los diferentes casos por los cuales se pretendía la prescripción, en la gestión 2013.

Refirió que, de la revisión de obrados se tiene que la AT, con antelación ejerció su facultad de ejecución tributaria al aplicar medidas coactivas en diferentes fechas, evitando que opere la prescripción, y que por otra parte se debe considerar las modificaciones a los arts. 59 y 60 de la Ley N° 2942 (Sic.), por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 y posteriormente por la Disposición Derogatoria Primera de la Ley N° 317, dejando establecido que la facultad de ejecutar la deuda determinada, es imprescriptible, en consecuencia la facultad de la AT para ejecutar las deudas tributarias establecidas.

Arguyó que, el 3 de junio de 2015, la Gerencia Distrital Tarija del SIN, fue notificada con el Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente en contra del Auto N° 25-0136-1506, y una contestado el mismo, se emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0742/2015, la cual revocó parcialmente el Auto N° 25-0136-15, al considerar prescrita la facultad para ejercer la ejecución tributaria correspondiente al IVA, IT e IUE de los periodos de enero a diciembre de 2004, contenidos en los proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0492-09; 24-0493-09; 24-0494-09; 24-0495-09;

24-0496-09; 24-0497-09; 24-0498-09; 24-0499-09; 24-0500-09; 24-0501-09; 24-0502-09; 24-0503-09, 24-0504-09, 24-0505-09, 24-0506-09, 24-0507-09, 24-0508-09, 24-0509-09, 24-0510-09, 24-0511-09, 24-0512-09, 24-0513-09, 24-0514-09, 24-1210-10 y 24-1211-10, disponiendo que la AT considere lo resuelto para las demás determinaciones del citado Auto, en aplicación del art. 212.II.1.a) de la Ley N° 2492.

Señaló que, el 15 de septiembre de 2015 la AT interpuso Recurso Jerárquico en contra de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0742/2015, dando lugar a que la AGIT emita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1898/2015, la cual confirmó la Resolución emitida por la ARIT Cochabamba, disponiendo se deje sin efecto parcialmente el Auto N° 25-0136-15, declarando prescrita la facultad de Ejecución Tributaria de la AT para los adeudos tributarios contenidos en los proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria señalados anteriormente.

I.1.2. Fundamentos de la demanda

Manifestó que la Resolución de Recurso Jerárquico impugnada, ha incurrido en error de derecho realizando una incorrecta apreciación y valoración de la prueba documental, violando el principio de "*Correcta valoración de la prueba*" sobre la interrupción del cómputo de la prescripción al haber la AT ejercido su facultad de ejecución tributaria, toda vez que en las páginas 21 al 22 del Sub numeral IV.4.2 sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de las Resoluciones Determinativas IV.4 Fundamentación Técnico-Jurídica, la AGIT no consideró con relación a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-1210-10 y 24-1211-10, en virtud a que el contribuyente no pagó los adeudos al tercer día de sus notificación, que la AT procedió a su ejecución tributaria, aplicando diferentes medidas coactivas, como ser hipotecas legales realizadas en Derechos Reales de los inmuebles con matrícula N° 6011270000182 y 6022010001545 en fechas 20 de agosto y 23 de septiembre de 2014, interrumpiendo de esta manera la prescripción.

Refirió que, es necesaria una interpretación más amplia de la norma tributaria, de acuerdo a lo establecido por el art. 8.I de la Ley N° 2492, recurriendo a los métodos de interpretación admitidos en derecho, como el lógico y el sistemático, por lo que en aplicación de los arts. 5 y 8.III de la Ley N° 2492, son aplicables las normas del Código Civil a efectos de establecer los términos de prescripción así como las causales de interrupción que se encuentran en el art. 1503 de dicho Código, de lo que se tiene que la ejecución tributaria también constituye un acto de interrupción de la prescripción, como ser el embargo de bienes o cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor, en este caso la hipoteca legal.

Señaló que, la AGIT ha dictado su resolución soslayando el principio de verdad material, violando el principio de "*correcta valoración de la prueba*" con relación a la interrupción de la prescripción por embargo e hipoteca legal de bienes, al no impartir justicia ya que actuó de manera apresurada sin resolver el fondo, sin estudiar punto por punto, teniendo en la página 26 del subnumeral IV.4.2., sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de las Resoluciones Determinativas, IV.4 Fundamentación Técnico-Jurídica de la Resolución, punto en el cual no se consideró los argumentos de la AT, en sentido de que en una aplicación más amplia de la normativa vigente se entiende que la interrupción tiene efectos más radicales que la suspensión, y borra totalmente el término transcurrido y la prescripción vuelve a correr por todo el término de ley, puesto que si bien el art. 61 de la Ley N° 2492 establece las causales de interrupción de la prescripción para casos establecidos en el art. 59.I.1.2.3 del mismo



Código, es evidente que existe un vacío normativo respecto a la interrupción de la prescripción para ejercer la facultad de ejecución tributaria por la AT.

Manifestó que, en el presente caso es necesaria una interpretación más amplia, de acuerdo al art. 8.I de la Ley N° 2492, recurriendo a los métodos como el lógico y el sistemático, conforme a la analogía admitida para vacíos legales conforme al art. 5 de la Ley N° 2492, siendo aplicable el art. 1503 del CC que establece las causas que interrumpen la prescripción, aspecto que la AGIT no consideró, puesto que las hipotecas de los inmuebles referidos interrumpen el cómputo de la prescripción, debiendo dicho cómputo del término de la prescripción y constitución en mora del deudor, reiniciarse el 16 de noviembre de 2014 para concluir el 16 de noviembre de 2018.

Finalmente, acuso que la AGIT ha dictado resolución violando el principio de la fundamentación y motivación de las resoluciones con relación a lo manifestado por la AT sobre la interrupción de la prescripción por embargo e hipoteca legal de bienes, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil, puesto que se limitó a señalar que dicho Código no es aplicable en el presente caso, sin considerar que los actos de embargo e hipoteca legal de bienes en mérito al art. 1503.I y II del CC constituyen causal de interrupción para el cómputo del término de la prescripción y constitución en mora del deudor.

I.1.3. Petitorio

Concluyó solicitando que se declare probada su demanda y se mantenga firme e incólume el Artículo Tercero del Auto N° 25-0136-15, en la parte referida a la declaración de improcedencia de la prescripción de la facultad de la AT para ejecutar los Títulos de Ejecución Tributaria y firmes consistentes en las Resoluciones Determinativas N° 32025717 y 32025716.

I.2. Contestación a la Demanda por la AGIT

Citada que fue con la demanda y su correspondiente auto de admisión, la AGIT dentro del plazo previsto por Ley, presentó respuesta negativa, conforme se tiene del memorial saliente de fs. 114 a 119 del cuaderno procesal, bajo los siguientes argumentos:

Señaló que, el art. 59.I de la Ley N° 2492, sin modificaciones, dispone que prescriben a los 4 años las acciones de la AT para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas; 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria; y que en cuanto al cómputo el art. 60.II de la misma ley, establece que el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, señalando también que en cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los arts. 61 y 62 de la Ley N° 2492 señalan que se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la RD; b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del contribuyente (solicitud de facilidades de pago); y se suspende con: I) La notificación de inicio de fiscalización individualizada al contribuyente, la cual se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses; II) Por la interposición de Recursos Administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente.

Manifestó que, tratándose de la facultad de ejecución, el inicio del cómputo se realiza desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, conforme a lo previsto por el art. 60.II de la Ley N° 2492, por lo que siendo que el proveído de inicio de ejecución tributaria en el medio por el cual la AT comunica al contribuyente sobre el título de ejecución tributaria y su respectiva ejecución, es a partir de la notificación con dicho acto que inicia el cómputo de la prescripción.

X

Refirió que, las notificaciones se efectuaron el 12 de febrero de 2007, 28 de abril de 2009 y 20 de mayo de 2011, y que el cómputo de la prescripción conforme al art. 60.II de la Ley N° 2492, es a partir del día siguiente de efectuadas dichas notificaciones, es decir, desde el 13 de febrero de 2007, 29 de abril de 2009 y 23 de mayo de 2011, concluyendo el 14 de febrero de 2011, 29 de abril de 2013 y 25 de mayo de 2015, fechas hasta las cuales la AT podía ejercer la facultad de ejecución para el cobro de las deudas determinadas, y al no haberlo hecho sus facultades para el cobro prescribieron.

Indicó que, sobre la aplicación del Código Civil y la actualización de medidas coactivas, se debe considerar que si bien cursan notas emitidas por la AT enviadas a diferentes entidades, solicitando información y aplicación de medidas coactivas, estas no tienen carácter interruptivo, puesto que los plazos y el cómputo para la ejecución de la deuda determinada se encuentran claramente establecidos en la Ley N° 2492, motivo por el cual no existe vacío legal y no corresponde la aplicación supletoria de ninguna otra norma, de tal manera que el cómputo y causales de interrupción y suspensión de la prescripción deben realizarse dentro el marco de lo dispuesto en los arts. 61 y 62 de la Ley N° 2492, causales que la AT no demostró que se hubieran configurado, por lo que al declarar prescrita la facultad de ejecución tributaria de la AT para los adeudos tributarios que son objeto de la presente demanda, la AGIT obro en estricta justicia.

Finalmente señaló que respecto a que la AGIT habría violado el principio de la fundamentación y motivación de las resoluciones, se debe añadir que de la revisión de antecedentes y de la lectura de la Resolución Jerárquica impugnada, se advierte que la misma se pronunció sobre todos y cada uno de los motivos y puntos observados por las partes, habiendo la AGIT identificado los puntos de controversia, desarrollado en los fundamentos técnico jurídicos los aspectos cuestionados de la resolución recurrida en el marco de las atribuciones conferidas por los arts. 139.b) y 144 de la Ley N° 2492, y 211 de la Ley N° 3092, y que consiguientemente no es evidente que la resolución impugnada en la presente demanda adolezca de falta de motivación y fundamentación.

I.2.1. Petitorio

Concluyó solicitando que se declare improbadamente la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1898/2015 de 9 de noviembre.

I.3. Memoriales de Réplica y Dúplica

Dispuesto el traslado con la contestación a la demanda, la parte demandante hizo uso de su derecho a la réplica, como se evidencia de fs. 122 a 125 vta., reiterando los fundamentos de su demanda; así también la AGIT presentó la dúplica correspondiente, conforme se evidencia por memorial cursante de fs. 128 a 130.

CONSIDERANDO II:

II.1 Antecedentes Administrativos y Procesales

A efectos de resolver la causa, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en sede jurisdiccional, informan lo siguiente:

El 10 de octubre de 2006, la AT emitió la RD N° 14/2006, que resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas del sujeto pasivo por un total de UFV's 2.549 correspondientes a la Orden de Verificación N° 6106ZZZ 0024, con la finalidad de verificar el cumplimiento del IVA e IT del periodo octubre de 2003, acto que fue notificado mediante cédula al sujeto pasivo en fecha 11 de diciembre de 2006.



El 17 de enero de 2007, el ente recaudador emitió el Proveído de Ejecución Tributaria N° 005/2007, anunciando al sujeto pasivo que estando firme y ejecutoriada la RD N° 014/2006, iniciará la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación.

El 21 de mayo de 2007, la Gerencia Distrital del SIN, emitió las Resoluciones Determinativas N° 30507878, 30507879, 30507880, 30507881, 30507882, 30507883, 30507884, 30507885, 30507886, 30507887, 30507888 y 30507889, determinando una deuda tributaria correspondiente al IVA de los periodos de enero a diciembre de 2004 respectivamente, asimismo emitió la RD N° 30507877, determinando una deuda tributaria correspondiente al IUE del periodo fiscal de marzo de 2004, toda vez que mediante Vista de Cargo, intimó a la presentación de la DJ de los periodos referidos, sin embargo dentro del término de prueba establecido en el art. 98 de la Ley N° 2492, el contribuyente no presentó la declaración extrañada ni ofreció pruebas que desvirtúen el cargo establecido, tampoco canceló la liquidación practicada.

El 17 de marzo de 2008, la AT emitió las Resoluciones Determinativas N° 32025708, 32025718, 32025719, 32025713, 32025712, 32025711, 32025710, 32025709, 32025717, 32025716, 32025715 y 32025714, determinando una deuda tributaria correspondiente al IT de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2004 respectivamente, toda vez que mediante la Vista de Cargo, intimó a la presentación de la DJ de los referidos periodos, sin embargo dentro del plazo de prueba establecido en el art. 98 de la Ley N° 2492, el contribuyente no presentó la declaración extrañada ni ofreció pruebas que desvirtúen el cargo establecido, tampoco canceló la liquidación practicada.

El 11 de marzo de 2009, el SIN emitió los proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0492-09; 24-0493-09; 24-0494-09; 24-0495-09; 24-0496-09; 24-0497-09; 24-0498-09; 24-0499-09; 24-0500-09; 24-0501-09; 24-0502-09; 24-0503-09, 24-0504-09, 24-0505-09, 24-0506-09, 24-0507-09, 24-0508-09, 24-0509-09, 24-0510-09, 24-0511-09, 24-0512-09, 24-0513-09 y 24-0514-09, comunicando el inicio de la Ejecución Tributaria de las Resoluciones Determinativas N° 30507877, 30507878, 30507879, 30507880, 30507881, 30507882, 30507883, 30507884, 30507885, 30507886, 30507887, 30507888, 30507889, 32025719, 32025718, 32025715, 32025714, 32025713, 32025712, 32025711, 32025710, 32025709 y 32025718 al tercer día de su legal notificación, conforme lo establecido en el art. 110 de la Ley N° 2492.

El 24 de diciembre de 2010, la AT emitió los proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-1210-10 y 24-1211-10, señalando que encontrándose firmes y ejecutoriadas las Resoluciones Determinativas N° 32025717 y 32025716, iniciará su ejecución al tercer día de su legal notificación.

El 29 de octubre de 2014, el contribuyente mediante memorial presentado a la AT, solicitó la prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda tributaria de la AT, PIET's N° 005/2007, 24-0492-09, 24-0493-09, 24-0494-09, 24-0495-09, 24-0496-09, 24-0497-09, 24-0498-09, 24-0499-09, 24-0500-09, 24-0501-09, 24-0502-09, 24-0503-09, 24-0504-09, 24-0505-09, 24-0506-09, 24-0507-09, 24-0508-09, 24-0509-09, 24-0510-09, 24-0511-09, 24-0512-09, 24-0513-09, 24-0514-09, 24-1210-10 y 24-1211-10 emergentes de las Resoluciones Determinativas, así como la anulación del Acta y Mandamiento de Embargo por carecer de los requisitos formales establecidos en los arts. 500 y 501 del Código de Procedimiento Civil.

El 6 de mayo de 2015, la AT notificó en forma personal al contribuyente con el Auto N° 25-0136-15, que declaró improcedente la solicitud de nulidad del Mandamiento de Embargo, Acta de Embargo N° 0065/2014, Vistas de Cargo, Resoluciones Determinativas y sus respectivas notificaciones, asimismo declaró improcedente la

prescripción de la facultad para ejecutar los Títulos de Ejecución Tributaria, disponiendo se prosiga con los trámites de ejecución tributaria hasta el cobro de los adeudos tributarios.

Dicho Auto generó que el contribuyente, interponga Recurso de Alzada, el cual fue resuelto por la ARIT mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0742/2015 de 24 de agosto, instancia que revocó parcialmente el Auto N° 25-0136-15, al estar prescrita la facultad para ejercer la ejecución tributaria correspondiente al IVA, IT e IUE de los periodos de enero a diciembre de 2004, contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria arriba mencionados; luego esta resolución emitida por la ARIT, dio lugar a que la AT interponga Recurso Jerárquico en contra de la misma, el cual fue resuelto por la AGIT, instancia que determinó confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0742/2015 emitida por la ARIT.

Esta última Resolución de Recurso Jerárquico, generó que la AT, por intermedio de su representante legal, se apersonó ante este Tribunal Supremo de Justicia, interponiendo demanda contencioso administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1898/2015 de 9 de noviembre. En el curso del proceso se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 354.II y III y 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

II.2 Decreto de Autos para Sentencia

Concluido el trámite del proceso, no habiendo más que tramitar, se decretó Autos para Sentencia el 7 de junio de 2016, conforme se verifica de fs. 131.

CONSIDERANDO III:

Fundamentos Jurídicos del fallo

III.1. Sobre la competencia de la Sala para conocer y resolver la causa

Por imperio de la Ley N° 620, de 29 de diciembre de 2014, se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, - que por acuerdo de Sala Plena N° 1/2015, de 6 de enero, forma una misma sala, conjuntamente la Social y Administrativa-, para el conocimiento y resolución de la presente controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso-administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, realizando el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la autoridad administrativa a tiempo de emitir la Resolución Jerárquica, aspecto este que acredita haberse agotado la vía administrativa, como exige el art. 778 “*in fine*”, del Código de Procedimiento Civil (CPC).

III.2. Análisis del problema jurídico planteado

En autos, se tiene identificados dos puntos de controversia que sustentan los fundamentos de la demanda formulada por la AT, los cuales ocuparán la labor de esta Sala, conforme los fundamentos y razonamientos que a continuación se expresan, siendo dichos puntos los siguientes:

1. *Que si el embargo e hipoteca legal de los inmuebles con matrícula N° 6011270000182 y 6022010001545 realizado por la AT, conforme el art. 1503 del CC, constituyen una causal de interrupción de la prescripción de la facultad de la AT para ejecutar los títulos de ejecución tributaria.*

2. *Que si la AGIT emitió su resolución violando el principio de la fundamentación y motivación, porque se limitó a señalar que el art. 1503.I y II del CC no es aplicable en el presente caso, si considerar que los actos de embargo e hipoteca*



legal de bienes constituyen causal de interrupción para el cómputo del término de la prescripción y constitución en mora del deudor.

Respecto a la controversia 1), en concreto se tiene, que de la revisión de los antecedentes administrativos con relación a la controversia que se plantea, que la figura de la prescripción en materia tributaria se encuentra establecida en el art. 59 de la Ley N° 2492 cuando a letra dice: **"Prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda Tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer sus facultades de ejecución tributaria."** El art. 60 del mismo cuerpo legal refiere: **"En el supuesto 4 del párrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria"**, de donde se concluye que el plazo de la prescripción es de 4 años y se computa desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

Por su parte, los arts. 61 y 62 de la Ley N° 2492, establecen que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la RD; b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable; y se suspende por: I) La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, la cual se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses; II) Por la interposición de Recursos Administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente.

Así en el caso específico, revisando los antecedentes, se tiene que las notificaciones con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 005/2007, 24-0492-09, 24-0493-09, 24-0494-09, 24-0495-09, 24-0496-09, 24-0497-09, 24-0498-09, 24-0499-09, 24-0500-09, 24-0501-09, 24-0502-09, 24-0503-09, 24-0504-09, 24-0505-09, 24-0506-09, 24-0507-09, 24-0508-09, 24-0509-09, 24-0510-09, 24-0511-09, 24-0512-09, 24-0513-09, 24-0514-09, 24-1210-10 y 24-1211-10, se efectuaron en el 12 de febrero de 2007, 28 de abril de 2009 y 20 de mayo de 2011, por lo que el cómputo para el término de la prescripción conforme al art. 60.II de la Ley N° 2492, se inicia al día siguiente de las fechas señaladas, concretamente el 13 de febrero de 2007, 29 de abril de 2009 y 21 de mayo de 2011, y termina el 14 de febrero de 2011, 29 de abril de 2013 y 25 de mayo de 2015, periodos hasta los cuales la AT podía aplicar sus facultades de ejecución, empero no se advierte que lo haya hecho así, tampoco se evidencia ningún tipo de interrupción, por lo que claramente dichas facultades prescribieron, argumento que correctamente emitió la AGIT en su resolución.

Con relación a que el embargo y la hipoteca legal de los inmuebles haya interrumpido el cómputo de la prescripción, se debe tener presente que los arts. 61 y 62 de la Ley N° 2492, han establecido de manera clara las causales de interrupción y de suspensión, no existiendo norma alguna que disponga como causal de interrupción o suspensión las medidas coactivas o concretamente en el presente caso el embargo y la hipoteca realizada, por lo que al no existir vacíos legales respecto a las causales de interrupción y de suspensión de la prescripción en materia tributaria como equivocadamente señaló el demandante, no puede aplicarse la causal de interrupción

señalada en el art. 1503 del CC, criterio que ha sido establecido por este Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sentencia N° 11 de 7 de marzo de 2016, por lo que corresponde confirmar los argumentos emitidos por la AGIT al encontrarse estos dentro la normativa legal vigente y aplicable en la materia, concluyendo sobre este agravio que la hipoteca legal y el embargo de los inmuebles señalados, no constituyen una causal de interrupción de la prescripción de la facultad de la AT para ejecutar los títulos de ejecución tributaria.

En ese entendido, se aclara que no es necesaria una interpretación más amplia de las causales de interrupción de la prescripción, como se acusó en la demanda, respecto a la aplicación de los métodos de interpretación lógico y sistemático, toda vez que los arts. 59 al 62 de la Ley N° 2492, disponen de manera precisa y completa la figura de la prescripción, la forma de cómputo, las causales de interrupción y de suspensión.

Asimismo es preciso señalar, que este Tribunal no encuentra violación alguna al principio de "*Correcta valoración de la prueba*" como señaló la parte demandante, puesto que en el expediente no cursa prueba alguna que desvirtúe los fundamentos de la AGIT, más al contrario, se advierte que la instancia jerárquica valoró adecuada y correctamente todos los documentos de los antecedentes, otorgándoles el valor correspondiente, concretamente a las hipotecas legales realizadas en Derechos Reales de los inmuebles con matrícula N° 6011270000182 y 6022010001545 en fechas 20 de agosto y 23 de septiembre de 2014, las cuales como se ha establecido *ut supra*, no constituyen causales de interrupción de la prescripción.

Finalmente sobre la controversia 2), este Tribunal concluye que la AGIT fundamentó y motivó debidamente su resolución, pronunciándose sobre todos los agravios reclamados en el Recurso de Alzada, explicando y desarrollando de manera comprensible porque se habría aplicado la prescripción y porque no los actos señalados por la parte demandante no constituyen una causal de interrupción de la mencionada prescripción, argumentando sus razones en estricto apego a la normativa que regula esta materia tributaria, por lo cual no se evidencia violación al principio fundamentación y motivación, siendo improcedente este agravio planteado por la AT en su demanda.

Por todo lo señalado, se concluye que los argumentos expuestos por la AT en su demanda, no tienen el sustento jurídico suficiente que le permita una resolución favorable, al contrario, se advierte que la AGIT al emitir su Resolución de Recurso Jerárquico, fundamentó y explicó correctamente los motivos por los cuales se aplicó la prescripción, así como por que no es aplicable la causal de interrupción del art. 1503 del CC, consecuentemente este Tribunal Supremo de Justicia debe mantener firme la Resolución de Recurso Jerárquico impugnada.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 a 781 del CPC, en concordancia con el art. 2.1 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando **IMPROBADA** la demanda contencioso-administrativa de fs. 28 a 38, interpuesta por Apolinar Choque Arevilca en su calidad de Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales Tarija

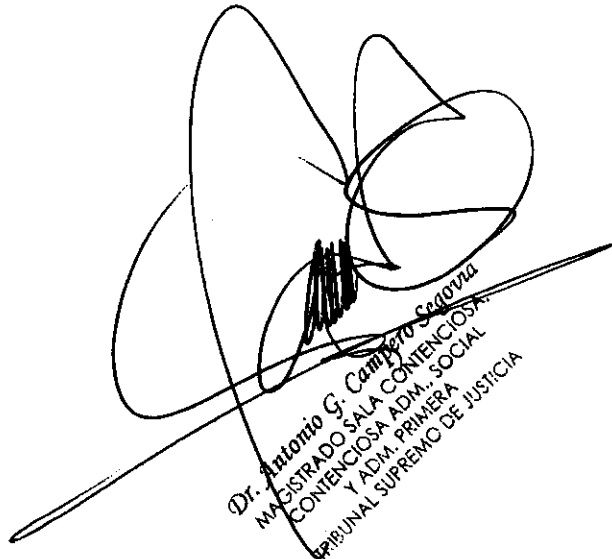


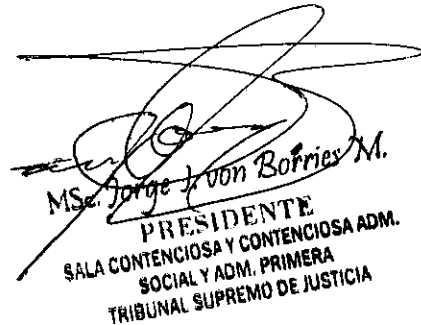
Estado Plurinacional de Bolivia
Órgano Judicial

(SIN), en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1898/2015 de 9 de noviembre, emitida por la AGIT.

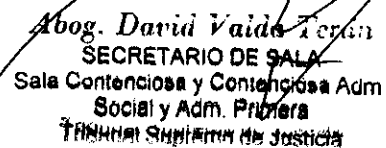
Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal Supremo de Justicia.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Dr. Antonio G. Camacho Segovia
MAESTRADO SALA CONTENCIOSA
SOCIAL Y ADM. PRIMERA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA


Msc. Jorge J. von Borries M.
PRESIDENTE
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM.
SOCIAL Y ADM. PRIMERA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Ante mí:


Abog. David Vaido Terán
SECRETARIO DE SALA
Sala Contenciosa y Contenciosa Adm
Social y Adm. Primera
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA	
ÓRGANO JUDICIAL DE BOLIVIA	
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	
SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA	
Sentencia N° 775	Fecha: 5-12-2016
Libro Tomas de Razón N°	